



# EDITORIAL



Siguiendo la tradición del CINEP, este número de *CONTROVERSIAS* quiere ofrecer algunos avances de su actividad investigativa, para compartirlos con la comunidad académica y el público en general, con el fin de aportar a las soluciones de los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Estos resultados parciales reflejan los logros de las actividades de los diversos equipos de investigación que componen el CINEP.

Así, Mauricio Archila nos ofrece un primer balance de su acercamiento bibliográfico a la historia social del Frente Nacional, con base en la contraposición entre desarrollo y protesta social, que permite encuadrar el desarrollo de las acciones colectivas y movilizaciones durante este período. Archila se distancia aquí de los que consideran estos años como una especie de edad de oro de los movimientos sociales para mostrar la complejidad y dinámica de estas protestas, como fruto de la interacción entre política, economía y cultura, que va más allá de la motivación puramente económica en que algunos insisten. Por otra parte, una de las conclusiones a las que apuntan los datos recogidos por él tiene que ver con la heterogeneidad interna de la protesta social, que muestra cómo los movimientos sociales reproducen y reflejan la fragmentación de la llamada sociedad civil. No aparece, entonces, un campo popular homogéneo y unitario enfrentado a un enemigo común, cohesionado y uniforme, lo que descarta una lectura guerrerista de la protesta social. Otros aspectos destacados por el autor son el papel de las clases medias en esas protestas y los problemas de la relación entre protesta social y representación política de lo so-

cial. Esta relación es difícil: por una parte, la instrumentalización política de los actores sociales significa la pérdida de su autonomía e identidad, pero, por otra parte, la total ruptura entre actores políticos y sociales termina produciendo la desinstitucionalización del conflicto social y el encerramiento de la política en sí misma, como actividad autorreferenciada.

Esta relación entre sociedad y política es retomada, desde otro punto de vista, por el artículo de Ingrid Bolívar, Adriana Posada y Renata Segura sobre el papel de las organizaciones no gubernamentales en el fortalecimiento de la llamada sociedad civil. El artículo recoge las principales conclusiones de una investigación patrocinada por la Interamerican Foundation, IAF, y realizada conjuntamente por investigadores de la Fundación Evaluar, del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y del CINEP, entre abril de 1995 y octubre de 1996. Después de haber discutido los presupuestos que están detrás de la invocación de este problemático concepto y de haber entrevistado a varios personajes relacionados con el tema, se tomaron varios estudios de caso que ilustraban las diferentes tendencias que se encontraban sobre la idea de fortalecimiento de la sociedad civil. Las(os) investigadoras(es) resolvieron concentrarse en la dimensión de la construcción del ámbito público, donde las relaciones entre Estado y Sociedad no sean de suma cero (donde el fortalecimiento de uno supone el debilitamiento de la otra, y viceversa) sino de mutuo reforzamiento. En esta línea, la construcción de un Estado democrático pasa por el reforzamiento de los lazos sociales y el establecimiento de una cultura democrática, pero el funcionamiento de estos lazos y cultura requiere del Estado como garante y árbitro de ese espacio público.

Estas dos lecturas generales sobre las relaciones entre sociedad y Estado contrastan con el acercamiento más concreto de las otras dos, que nos muestran otras dimensiones del trabajo del CI-NEP. Por una parte, Ximena Useche analiza los lugares comunes y las tendencias de la política internacional frente al tráfico de las drogas, que muestra la necesidad de que el país diseñe sus respectivas políticas de una manera más integral. Por otra, Natalia Paredes nos ilustra sobre la realidad de las políticas descentralizantes en materia de salud pública.

Ximena Useche muestra las diferentes maneras como la comunidad internacional afronta las temáticas del consumo, del tráfico y de la producción de sustancias psicoactivas, con base en la comparación de los casos de Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda y Estados Unidos, para concluir que las posiciones distan de ser homogéneas e indiferenciadas, lo mismo que los discursos que dan sentido a sus posiciones. Las políticas se debaten entre la extensión de las actuales medidas represivas y la imposición paulatina de medidas que buscan reducir el daño producido por las drogas. Incluso, en los mismos Estados Unidos, dista mucho de existir el consenso del conjunto de la población sobre las políticas antidrogas que las medidas de su gobierno en contra de los países productores harían suponer. Lo que llevaría a la necesidad de evaluar de manera más equilibrada los pros y los contras de la "guerra contra las drogas" que el gobierno norteamericano quiere que emprendan los gobiernos de los países productores.

Finalmente, Natalia Paredes nos proporciona un buen marco introductorio para entender el funcionamiento del sistema de salud pública en la Nación y en el Distrito Capital y nos ilustra sobre sus transformaciones recientes en el marco de las políticas de descentralización. El artículo va más allá de la adecuada descripción, al apuntar algunas observaciones críticas. No deja de ser

preocupante el hecho de que la población en pobreza absoluta esté siendo vinculada tan lentamente al sistema público de salud y el que las críticas justificadas a los abusos del llamado Estado de bienestar puedan conducir al extremo de dejar a amplias capas de la población abandonadas a sus propias fuerzas en el campo de la salud. El hecho de considerar la salud como una mercancía más, sujeta a las leyes del mercado, comporta severos riesgos éticos, aunque la descentralización podría permitir el desarrollo de iniciativas locales y regionales más adecuadas a las propias necesidades. Otro cuestionamiento tiene que ver con el efecto redistributivo de las medidas, ya que parece que los programas de cobertura universal tienen un efecto redistributivo mayor que el de los programas focalizados.

*Fernán B. Louzillo*

